



## Asamblea General

Distr. general  
24 de febrero de 2012  
Español  
Original: inglés

---

**Consejo de Derechos Humanos  
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre  
la Detención Arbitraria en su 59º período de sesiones  
(18 a 26 de noviembre de 2010)**

**Nº 24/2010 (República Árabe Siria)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 13 de agosto de 2010**

**Relativa a: Ziad Wasef Ramadan**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haber respondido a su comunicación y haberle facilitado información sobre las denuncias de la fuente.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III).

4. El caso que se resume a continuación se refiere a Ziad Wasef Ramadan.
5. El caso del Sr. Ramadan es también el tema de un llamamiento conjunto urgente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (véase A/HRC/11/41/Add.1, párr. 301).
6. La fuente informó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de que el Sr. Ramadan se encuentra actualmente detenido en una prisión militar de seguridad. Tiene 33 años y es ciudadano sirio. Vivía en el Líbano antes de trasladarse a Homs, en la República Árabe Siria.
7. En el Líbano el Sr. Ramadan trabajaba para una empresa de informática en la que también colaboraba Ahmed Abu Adas. La red Al-Jazeera difundió un vídeo en el que el Sr. Abu Adas confesaba haber asesinado al ex Primer Ministro del Líbano Rafiq Hariri. La fuente se remitía al informe de marzo de 2005 de la Misión de Determinación de los Hechos en el Líbano, enviada por las Naciones Unidas para investigar las circunstancias, causas y consecuencias del asesinato del ex Primer Ministro Rafiq Hariri, en el que se afirma que hay pocas pruebas que apoyen la declaración del Sr. Abu Adas (véase S/2005/203, párr. 43).
8. El 14 de febrero de 2005 el Sr. Ramadan fue interrogado por las autoridades libanesas por su colaboración con el Sr. Abu Adas. Tras el interrogatorio, el Sr. Ramadan regresó a Siria. Al parecer temía por su futuro a la luz de la implicación siria en el asesinato de Rafiq Hariri y era consciente también de que el Servicio de Información Militar del Líbano quería interrogarle.
9. La Oficina de Inteligencia Militar de Siria dictó una orden de comparecencia al Sr. Ramadan que, acompañado de su abogado, se presentó voluntariamente a las autoridades el 20 de julio de 2005. Según la fuente, el Departamento de Seguridad Política de la Inteligencia Militar procedió a su detención: le vendaron los ojos y lo encerraron en una celda. El Sr. Ramadan no fue informado de que existiera una decisión u orden de detención contra él. Según la fuente, su detención fue ordenada por Assef Shawkat, jefe de las fuerzas militares sirias, que quería interrogarle sobre la investigación del caso Hariri.
10. Desde el 20 de julio de 2005, fecha de su detención, la familia del Sr. Ramadan no tuvo noticias de él ni de su paradero durante seis meses. La fuente informa de que al cabo de ese tiempo fue trasladado a la prisión principal de Homs, a unos 160 km al norte de Damasco.
11. En septiembre de 2007 el Sr. Ramadan fue trasladado a la prisión de la sección palestina donde al parecer sigue internado en la actualidad. No se facilitaron a su familia las razones del traslado. La fuente informa de que está recluso en una celda subterránea donde los reclusos suelen ser mantenidos en régimen de aislamiento y sometidos a torturas y otras formas de malos tratos. Su familia lo vio por última vez en septiembre de 2007 en la sección palestina de la Seguridad Militar de Damasco. En agosto de 2009 su familia tuvo conocimiento de que las autoridades sirias permitían a los familiares visitar a los reclusos detenidos en la sección palestina y solicitó el oportuno permiso. El 18 de agosto de 2009 su petición fue rechazada. La familia no recibió ninguna respuesta a sus preguntas sobre su salud.
12. De acuerdo con su método de trabajo, el Grupo de Trabajo envió una comunicación al Gobierno el 13 de agosto de 2010.
13. En su respuesta de 16 de agosto de 2010 el Gobierno se remite a su nota verbal de 17 de febrero de 2009 enviada en respuesta al llamamiento conjunto urgente (véase el párrafo 5 *supra*) y precisa los argumentos pertinentes para el caso que tiene actualmente ante sí el Grupo de Trabajo.

14. El Gobierno afirma que el Sr. Ramadan es un "testigo clave de la investigación" del asesinato del Sr. Hariri. Precisa que el 23 de mayo de 2006 Serge Brammertz pidió información sobre el Sr. Ramadan a los efectos del interrogatorio al que sería sometido por la Misión de Determinación de los hechos en el Líbano, que investigaría las causas, las circunstancias y las consecuencias del asesinato del ex Primer Ministro Rafiq Hariri.
15. El Gobierno afirma que el Sr. Ramadan está defendido por un abogado de su elección.
16. El Gobierno afirma que se le ha mantenido en prisión vigilada desde el 21 de julio de 2005 porque existen temores por su vida, derivados de la importante información de que dispone y, especialmente porque las investigaciones del asesinato del Sr. Hariri no han concluido todavía.
17. El Gobierno reiteró que la prisión vigilada del Sr. Ramadan es totalmente conforme con las leyes de la República Árabe Siria y con sus obligaciones internacionales. No es arbitraria y, por consiguiente, no cabe hablar de un caso de detención arbitraria.
18. En la nota verbal de febrero de 2009, adjunta a la respuesta del Gobierno, se afirma que el nombre del Sr. Ramadan surgió durante las investigaciones que el Gobierno de Siria estaba realizando, que habían demostrado que tenía relaciones con una organización terrorista que perpetró actos de sabotaje en la República Árabe Siria y en el Líbano, en los cuales resultaron muertos un número indeterminado de civiles inocentes.
19. Como ya se ha indicado, el Gobierno en su respuesta hace referencia a su nota verbal de 17 de febrero de 2009 en respuesta al llamamiento urgente. El procedimiento del llamamiento urgente se aplica cuando hay denuncias lo bastante creíbles que una persona ha sido detenida arbitrariamente y que su detención continuada puede constituir un grave peligro para su salud o su vida. El Grupo de Trabajo reitera su preocupación por la salud del Sr. Ramadan, ya expuesta en el llamamiento urgente. La afirmación del Gobierno de que la detención del Sr. Ramadan tiene por objeto su propia protección no hace menos pertinentes las preocupaciones sobre su salud y plantea la cuestión de la proporcionalidad, y en particular, la idoneidad de la detención en relación con el objeto declarado de la protección.
20. La cuestión que tiene actualmente ante sí el Grupo de Trabajo es la de determinar si la detención del Sr. Ramadan es arbitraria o viola de cualquier otro modo la normativa internacional de los derechos humanos.
21. El Gobierno afirma que el Sr. Ramadan es un testigo clave en la investigación del asesinato del Sr. Hariri y que el Sr. Ramadan está detenido por su propia seguridad.
22. El artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíben la detención arbitraria. El párrafo 2 del artículo 9 del Pacto estipula que toda persona detenida sea informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. En este caso, no parece que se haya formulado ninguna acusación contra el Sr. Ramadan. El Grupo de Trabajo considera por consiguiente que el Estado parte ha infringido el párrafo 2 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
23. El párrafo 3 del artículo 9 del Pacto establece que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. En este caso, el Sr. Ramadan no ha sido llevado ante ningún juez ni ha sido juzgado. El Grupo de Trabajo considera por consiguiente que el Estado ha infringido el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

24. El párrafo 4 del artículo 9 del Pacto establece que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal. En este caso, no se ha concedido al Sr. Ramadan la posibilidad de recurrir ante ningún tribunal. El Grupo de Trabajo considera por consiguiente que el Estado ha infringido el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

25. El párrafo 5 del artículo 9 del Pacto prevé que toda persona que ha sido ilegalmente detenida tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. En su jurisprudencia el Grupo de Trabajo ha continuado desarrollando el derecho a una reparación, principalmente en forma de puesta en libertad inmediata y de indemnización. En este caso, el Sr. Ramadan tiene derecho a una reparación según el párrafo 5 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las razones expuestas por el Gobierno para justificar la detención del Sr. Ramadan no pueden oponerse a su derecho a una reparación. El Grupo de Trabajo subraya que todos los funcionarios y organismos públicos están obligados a cumplir las normas internacionales de derecho humanitario.

26. El Grupo de Trabajo precisa que no es suficiente que un Estado afirme que ha cumplido el derecho internacional o las normas de derechos humanos o sostenga que la imposición de restricciones a los derechos se justifican en determinados casos. El Grupo de Trabajo tendrá que examinar todas las comunicaciones. En muchos casos la decisión en cuanto a si una detención es arbitraria depende del examen de la proporcionalidad.

27. Al examinar un caso el Grupo de Trabajo no contempla cuestiones de derecho sino que más bien considera la aplicación de la ley al caso en cuestión. La respuesta del Gobierno plantea al Grupo de Trabajo tres motivos de preocupación. En primer lugar la argumentación del Gobierno no aborda el tema de la detención ininterrumpida durante cinco años, que no se puede considerar proporcional ni aún aceptando las demás razones del Gobierno.

28. En segundo lugar, en cuanto a la confianza expresa del Gobierno en las diligencias de las Naciones Unidas en relación con el asesinato de Rafiq Hariri, el Grupo de Trabajo opina que la detención continuada del Sr. Ramadan no se puede basar en la cooperación con los procedimientos de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo desea precisar que la cooperación internacional sigue habitualmente los procedimientos establecidos para la asistencia penal y está sometida al derecho internacional y a las normas de derechos humanos. En particular, la prohibición de la detención arbitraria está autorizadamente reconocida como norma de *jus cogens* o norma imperativa del derecho internacional (véase, entre otros, la Observación general del Comité de Derechos Humanos N° 29 (2001) sobre los estados de excepción).

29. En tercer lugar, el Grupo de Trabajo vuelve a la referencia que se hace en la nota verbal del Gobierno de febrero de 2009 en relación con la información sobre posibles conexiones con una organización terrorista. El único efecto de esa información sería la profundización del examen del caso por parte del Grupo de Trabajo. A la vista de la práctica no solamente de este Grupo de Trabajo sino también de todos los órganos internacionales de derechos humanos que se han ocupado de esta materia, una referencia general a posibles vínculos terroristas no puede servir de base para limitar los derechos.

30. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Ramadan es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

31. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la República Árabe Siria que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de conformidad con las normas y principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

32. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner inmediatamente en libertad al Sr. Ramadan y concederle la reparación adecuada.

[Aprobada el 19 de noviembre de 2010.]

---